LIBRO JUBILAR
EN HOMENAJE AL PROFESOR
ANTONIO GIL OLCINA

EDICIÓN AMPLIADA

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

**LIBRO JUBILAR EN HOMENAJE
AL PROFESOR ANTONIO GIL OLCINA**

EDICIÓN AMPLIADA

**LIBRO JUBILAR
EN HOMENAJE AL PROFESOR
ANTONIO GIL OLCINA**

EDICIÓN AMPLIADA

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE GEOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Publicaciones de la Universidad de Alicante
03690 Sant Vicent del Raspeig
publicaciones@ua.es
<http://publicaciones.ua.es>
Teléfono: 965 903 480
Fax: 965 909 445

© los autores, 2016
© de la presente edición: Instituto Interuniversitario de Geografía y Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-16724-09-3
DOI: <http://dx.doi.org/10.14198/LibroHomenajeAntonioGilOlcina2016>

Coordinación:
Jorge Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós

Edición, composición y diseño de cubiertas:
Clotilde Esclapez Selva

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

LA COLONIZACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Carlos Barciela

Universidad de Alicante

“Hay dos versiones contradictorias del régimen dictatorial que el general Primo de Rivera impuso en septiembre de 1923... Hay una versión favorable, que lo juzga por sus propósitos, por los proyectos de ley y por la retórica nacionalista de sus discursos. Y la hostil que lo identifica con el fascismo. Ninguna de las dos es correcta. La primera, porque las intenciones, e incluso las leyes, no siempre alcanzan sus objetivos. La segunda, porque el régimen no intentó jamás una movilización de masas de signo fascista. Se trataba de un régimen de terratenientes, gente de orden y “señoritos”, que practicaría una política de conservadurismo puro, aderezada con rasgos de paternalismo ilustrado.”

J. Fontana y J. Nadal, *España, 1914-1970*

En su obra *Política Económica de la Dictadura*, el profesor Velarde proporcionaba un panorama general de la evolución económica de este periodo histórico y un análisis sistemático de las principales líneas de la política económica de Primo de Rivera.

Se han cumplido cuarenta años desde que Velarde publicó su trabajo y la investigación histórica, afortunadamente, ha avanzado en este tema de una manera verdaderamente espectacular. Hoy, conocemos mejor el contexto económico internacional y el grado de integración de la economía española en la mundial, la propia realidad de la economía española, -desde la evolución de las principales macromagnitudes hasta el comportamiento individualizado de los diferentes sectores productivos- así como la propia política económica, y, sobre todo, su instrumentación y sus efectos¹.

En lo que concierne a este último aspecto y como afirman J. Fontana y J. Nadal en la cita que sirve como introducción a este texto, es necesario, a la hora de valorar lo que fue el régimen dictatorial de primo de Rivera, pasar

¹ La bibliografía publicada es muy voluminosa. De obligada consulta son los trabajos de Carreras y Tafunell (2005) y (2010), Comín (1988), (1996) y (2002), Comín y Martín Aceña (1984), Fraile (1991) y (1998), García Delgado (1985), Martín Aceña (1984), Nadal, Carreras y Sudrià (compiladores) (1987), Parejo y Sánchez Picón (2007), Prados de la Escosura (2003), Tortella (1994) y Velasco (1979).

del análisis de las intenciones y las leyes, al de los hechos y los resultados. Porque, en efecto, la mayor debilidad de la clásica obra de Velarde es la de confundir los deseos y los objetivos de leyes promulgadas por la Dictadura, con la realidad.²

En lo que concierne específicamente al sector agrario la investigación histórica también ha progresado de manera sustancial. Conocemos con bastante precisión tanto la evolución de las principales macromagnitudes como las transformaciones técnicas que afectaron al sector. Igualmente se ha avanzado en el estudio de la política agraria y los resultados de la misma, dentro de un proceso de creciente intervención del Estado³.

Sin lugar a dudas, la faceta más destacada, la de más impacto mediático, de la política agraria fue la concerniente a las reformas estructurales, tanto en su vertiente técnica: la política hidráulica, como en la social: la distribución de la propiedad. El objeto de mi trabajo es, precisamente, dentro de la línea propuesta por Fontana y Nadal, el de contribuir a un conocimiento más preciso acerca de los resultados de las medidas adoptadas para resolver el problema de la mala distribución de la propiedad de la tierra. Mi planteamiento es, pues, llegar a conclusiones, no sobre los propósitos enunciados en la legislación primorriverista en relación al denominado *problema agrario*, sino sobre su capacidad real de actuación y sobre los resultados logrados. Sin duda es así como debe juzgarse la labor gubernamental. Considerar la actividad legislativa, en sí misma, como muestra de actividad o de sensibilidad es un grave error. Y ello no solo porque se confunden proyectos con realidades, sino, también, porque la profusión de normas, planes, proyectos, estudios...que, después, no son llevados a la práctica puede resultar muy perjudicial. De manera más precisa, y en ello están de acuerdo los principales expertos internacionales en la materia, la profusión legislativa si no va acompañada de medidas reales y de presupuestos adecuados puede provocar elevados niveles de escepticismo en los grupos afectados acerca de las verdaderas intenciones o capacidad del Estado para llevar a cabo los proyectos. Si el Estado da muestras de ineficacia o de incompetencia técnica, si incumple sus compromisos y los planes anunciados, se creará entre los agricultores afectados la idea de que más vale no arriesgarse en futuros empeños. Se generará una desconfianza

2 Concretamente y en lo que respecta a la política económica de la Dictadura, tan elogiada por Velarde, el juicio de Comín y Martín Aceña es claramente discrepante: "Es preciso, por tanto, situar la política mixta en su lugar: si la economía española conoció un auge apreciable en los años veinte, y sufrió un estancamiento, con crisis sectoriales importantes en los treinta, no fue única, ni principalmente debido a las acciones presupuestarias o monetarias." Comín y Martín Aceña (1984), p.256.

3 Entre las obras más destacadas cabe señalar los trabajos de Barciela, López Ortiz y Melgarejo (1996), Fernández Prieto (2007), Gallego (1986), Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco (eds.) (1986), Grupo de Estudios de Historia Rural (1978-1979), (1983a) y (1983b), Pan-Montojo (2005) y (2011), Simpson (1992) y Zambrana (1987).

que hará más difícil la puesta en marcha de medidas posteriores aunque estén bien diseñadas y adecuadamente dotadas presupuestariamente.

Los agricultores, lejos de lo que sostiene un tópico muy poco fundado, no son insensibles al progreso y al beneficio. Pero como cualquier empresario evalúan los riesgos de cambiar los métodos de producción. Si el Estado da muestras, y reiteradamente, de que es un socio poco fiable, de que sus proyectos no terminan nunca de ser realidad, provocará una reacción negativa. El agricultor terminará pensando que valen más los métodos tradicionales, que los métodos novedosos propuestos por un Estado incapaz de llevarlos a cabo.

Las mismas dudas se plantean, en mi opinión, en relación al verdadero alcance de las propuestas reformistas de destacados personajes de la época como González Besada o el Vizconde de Eza, muy activos en el campo político y en la publicación de informes y propuestas.

Cronológicamente mi estudio abarca, también, las primeras décadas del siglo, pues, como es conocido, en 1907 se publicó una norma La Ley de Colonización Interior que comparte con la de 1927 objetivos y limitaciones. El punto final es 1931, año en el que finalizó la aplicación de la Ley de Parcelaciones.

Debo indicar que he renunciado a la exposición detallada del contenido de las citadas normas y del marco institucional en el que se promulgaron, pues estos aspectos han sido analizados de manera minuciosa y satisfactoria por otros autores y de manera particular por J. Monclús y J. L. Oyón y N. Ortega.⁴

Pasando, pues, al análisis de los resultados considero conveniente comenzar por aquéllos a los que llegaba Velarde en su ya citado trabajo. Velarde manifiesta una opinión claramente positiva en su juicio sobre la política hidráulica; se muestra, sin embargo, más crítico en lo concerniente a la labor realizada al amparo de las leyes colonizadoras de 1907 y 1927. De manera más precisa destaca la falta de resultados, aunque compara positivamente el periodo 1927-1929, con lo realizado entre 1907 y 1923.⁵

Posteriormente, autores como E. Malefakis, N. Ortega, J. I. Jiménez Blanco y J. Monclús y J. L. Oyón han agudizado los tintes críticos en la valoración de la política colonizadora del primer tercio del siglo XX. Según Jiménez Blanco: “el balance global de la política de colonización no puede ser más desolador: en los años treinta, los problemas derivados de de la desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra seguían planteados

4 Monclús y Oyón (1986) y (1988) y N. Ortega (1979a) y (1979b)

5 Velarde (1973), pp. 193-198.

con toda su crudeza.”⁶ No obstante este juicio crítico, tanto Ortega como Monclús y Oyón sostienen un argumento, ya presente en Velarde, favorable a obra de la Dictadura: su labor fue valiosa no tanto por los resultados, como porque sirvió de experiencia para futuras actuaciones.⁷

Como ya he señalado anteriormente, el argumento del valor de la experiencia es sumamente cuestionable. Más adelante aportaré las valoraciones que hacen, al respecto, los expertos internacionales en la materia.

Mi objetivo, por lo tanto es doble: trataré de precisar con detalle los resultados de la política colonizadora y debatir el supuesto de que, al menos, debemos valorar positivamente la experiencia de esos años.

Si aceptamos que el problema social-agrario y los intentos de solución durante la Segunda República fueron uno de los factores desencadenantes de la Guerra Civil, podemos considerar que la política de reforma llevada a cabo entre 1907 y 1930 fue negativa en el sentido de que no solo no resolvió los graves problemas sociales del campo sino que además, con su pasividad, los gobiernos contribuyeron a agudizar dichos conflictos. En efecto lo realizado en materia de reforma agraria (en el sentido más amplio del término) entre 1907 y 1931 fue muy poco. Los resultados, en relación a la magnitud del problema fueron despreciables.

En lo que concierne a la política hidráulica, J. Melgarejo, el mejor experto en esta cuestión, ha destacado la importancia de la creación de las confederaciones hidrográficas y su innovadora forma de entender la gestión hídrica en el ámbito de una cuenca⁸. El juicio de J. I. Jiménez Blanco, tras un análisis minucioso de lo realizado entre 1904 y 1932, me parece definitivo: *“...hubo un aumento de los terrenos regados y una mejoría de los sistemas empleados, consistente en la transformación del regadío eventual en permanente. Sin embargo, el ritmo de expansión del regadío es parejo al de la superficie cultivada y por eso la proporción entre ambas magnitudes se mantiene constante. En resumen, las cifras demuestran que la intensificación del uso del suelo en España no fue consecuencia de los logros de la tan aireada política hidráulica; los avances en este campo solo dieron para mantener la importancia relativa del regadío.”*⁹

6 J. I. Jiménez Blanco (1986), pág. 120.

7 Así, N. Ortega (1979), pág. 89, afirma: “De cualquier manera, los planteamientos y las proposiciones de la política de colonización y repoblación interior constituían, desde luego, un conjunto doctrinal tan significativo como aprovechable en relación con posteriores criterios estatales de la postguerra.” Por su parte Monclús y Oyón (1986), pág. 359 señalan: “A pesar de ello, la serie sucesiva de proyectos de ley, las discusiones y publicaciones del citado organismo y su participación en otras instituciones estatales habían ido formando un cuerpo teórico sobre la colonización y una “técnica administrativo-colonizadora” que es necesario observar más detenidamente, dada su posterior trascendencia.”

8 Véase J. Melgarejo (1988, 1995 y 2000).

9 J. I. Jiménez Blanco (1986), pp.89-90.

Por lo que respecta a la política de colonización, cuestión en la que está centrada mi aportación, hay que comenzar afirmando que los trabajos publicados hasta el momento no han proporcionado una información detallada y completa sobre los resultados de la aplicación de las leyes de 1907 y 1927. Y ello tanto en lo que concierne a la información cuantitativa: número de fincas afectadas, colonos instalados, distribución de las superficies por cultivos y aprovechamientos, como a diversos aspectos cualitativos fundamentales para entender el alcance del proyecto: características de las tierras, acceso o no de los colonos a la propiedad y condiciones, calidad de los suelos, existencia o no de trabajos de colonización y mejoras en las explotaciones o situación de las comunicaciones. Por otra parte, ha sido frecuente cortar la información cuantitativa de la aplicación de la Ley de Parcelaciones en 1929, coincidiendo con el final de la Dictadura. Así lo presentaba Cristóbal de Castro¹⁰ en su libro de 1931 y así lo han hecho, posteriormente, autores como Velarde¹¹, olvidando que dicha norma se siguió aplicando en 1930 y 1931.

La principal aportación del presente trabajo radica, precisamente, en el estudio de estas cuestiones. En el archivo del antiguo IRYDA, y gracias a la amabilidad de sus responsables, tuve acceso a una documentación consistente en un fichero de todas las fincas que han pertenecido o pertenecen al citado organismo, a su antecesor el INC o al Estado, como consecuencia de la aplicación de las leyes de 1907 y 1927. En definitiva un estado con todas las fincas afectadas por las diversas normas colonizadoras.

Cada finca está registrada en una ficha que recoge una serie de datos fundamentales: superficie total, precio de compra, fecha de la adquisición, distribución de las superficies por cultivos y aprovechamientos, número de colonos. Es de lamentar que el esfuerzo realizado al elaborar dichas fichas no se completase añadiendo información sobre otras cuestiones igualmente importantes como, por ejemplo, las relativas a los medios de labor. No obstante, para nuestros fines: delimitar con precisión el alcance de la política redistribuidora, la información es bastante satisfactoria. A partir del citado fichero he elaborado los cuadros 1 a 5 en los que presento de forma sintética un resumen de las principales características de las fincas.

En los cuadros 1 y 2 pueden verse los resultados de la aplicación de la Ley de Colonización Interior de 1907. Conviene advertir, pues es un buen reflejo de la escasa seriedad con la que los gobiernos de la época se tomaron este asunto, que dicha ley, tras muchos avatares, solo empezó a aplicarse en 1917¹². Que fuera precisamente en 1917, año de la revolución

10 C. de Castro (1931), p.183

11 J. Velarde (1973), p. 197.

12 Acta número 5 del Consejo Nacional de Colonización de la sesión del 4 de marzo de 1942, p.4.

FINCA	TÉRMINO MUNICIPAL	PROVINCIA	SUPERFICIE TOTAL (HA)	REGADÍO	CEREAL DE SECANO	OLIVAR	VIÑEDO	PASTOS	MONTE	IMPRODUCTIVO	OTRAS	NÚMERO DE COLONOS	SUPERFICIE DE LOS LOTES (HA)
PLANS	ALCOY	ALICANTE	311	0	65	0	0	0	246 (12)	0	0	10	15 a 20
PUERTO	CASTILLO DE LOCUBÍN	JAÉN	248	0	144 (1)	0	0	0	0	104	0	24	5 a 10
SIERRA DE SALINAS	VILLENA	ALICANTE	1.362	0	300	175	175	0	675	37	0	49	15 a 20
ALGAIDA	SANLUCAR DE BARRAMEDA	CÁDIZ	462	138	0	0	116	0	132 (2)	76	0	196	1 a 2
BARRIONUEVO	CONIL DE LA FRONTERA	CÁDIZ	264	0	200	0	0	0	61 (3)	3	0	102	Muy variable
CAULINA	JEREZ DE LA FRONTERA	CÁDIZ	194	150	0	0	0	35	4 (4)	5	0	75	2
ALQUERÍA	HUELVA	HUELVA	467	0	250	0	101	0	0	116	0	46	No consta
MONTGÓ	DENIA	ALICANTE	654	0	0	0	128	0	475 (3)	0	51 (6)	51	3 a 5
HIGUERUELA Y VALLES	CANOMERO	CÁCERES	2.185	0	877	0	594 (7)	0	640	74	0	454	3 a 5
ROÑA DE LAS LAGUNAS	HORCAJO DE LOS MONTES	CIUDAD REAL	546	0	325	0	80	0	125 (3)	16	0	81	6 a 8
LENZISQUILLA, MANADEROS Y VALDECONEJOS	ALMONTE	HUELVA	653	0	267	0	270	0	76 (8)	40	0	139	3 a 5
GAVIO	HINOJOS	HUELVA	410	0	48	0	78 (9)	0	127	157 (3)	0	85	5 a 6
UMBRIA DE LA SIERRA	HERRERA DEL DUQUE	BADAJOS	441	0	103	0	207 (11)	0	131 (3)	0	0	207	1 a 3
ENEBRADA	ARANDA DE DUERO	BURGOS	200	97	0	0	40	0	63 (3)	0	0	40	3 a 4
COTOS DE SALINAS	YECLA	MURCIA	1.290	0	56 (1)	0	31	0	1.203	0	0	12	15
CERRILLO VERDE Y VALDECARNEROS	VALVERDE DE ALCALÁ	MADRID	268	0	200	0	60	0	0	8	0	13	20
GALEÓN	CAZALLA DE LA SIERRA	SEVILLA	622	0	100	0	210	0	274 (3)	38	0	70	8 a 10
STA.Mª DE CARRACEDO	CARRACEDO	LEÓN	202	0	150	0	35	11	0	6	0	52	1 a 5
TOTAL 18 FINCAS			10.779	385	3.085	175	2.125	46	4.232	680	51	1.706	

Cuadro 1. Colonias agrícolas creadas por la Ley de Colonización Interior de 1907. Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de fincas propiedad del Instituto Nacional de Colonización, facilitadas por el IRYDA.

	HA	%
SUPERFICIE TOTAL	10.779	100
REGADÍO	385	3,6
CEREAL DE SECANO	3.085	28,6
OLIVAR	175	1,6
VIÑEDO	2.125	19,7
PASTOS	46	0,4
MONTE	2.114	19,6
MONTE-IMPRODUCTIVO	2.118	19,6
IMPRODUCTIVA	680	6,3
OTROS	51	0,5

NÚMERO DE FINCAS ADQUIRIDAS: 18

NÚMERO DE COLONOS: 1.076

SUPERFICIE MEDIA POR COLONO (HA): 10,02

Cuadro 2. Distribución por cultivos y aprovechamientos de la superficie de las colonias creadas por Ley de 1907. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro 1.

bolchevique, no es mera coincidencia. Los problemas sociales del campo preocupaban a las clases propietarias solo en la medida en que podían traducirse en un riesgo para el sistema. En total se crearon 18 colonias, en terrenos cedidos **gratuitamente** por los Ayuntamientos reseñados, que abarcaban una superficie total de 10.779 ha. y en la que se instalaron 1.706 colonos. La verdad es que con esta información no es en modo alguno necesario añadir nada más para afirmar que la tan publicitada ley fue un auténtico fiasco y que no merecería seguir ocupando una línea en los libros de historia a no ser para demostrar que las clases propietarias no mostraron el menor interés real en resolver el problema de la injusta distribución de la propiedad. Por cerrar definitivamente el asunto cabe añadir que la superficie de los lotes resultaba muy variable, en función de la extensión de la finca, y no de las exigencias de sostenibilidad de las explotaciones. El resultado es el de superficies muy modestas y explotaciones inviables. Si entramos en más detalles y analizamos la distribución de la superficie por cultivos y aprovechamientos el panorama empeora. De las 10.779 ha. “colonizadas” tan solo 385 eran de regadío, es decir un 3,6 por ciento de la superficie. Además, 150 ha. calificadas como de regadío, las de la finca La Caulina, todavía no estaban efectivamente en riego en 1924. Es una verdadera decepción que todo el “reformismo hidráulico” del primer tercio del siglo, que se tradujo en un derroche normativo, que llenó miles de páginas y que dio pie a numerosos actos de propaganda, terminara con la distribución de 385 ha. de regadío.

Por otra parte, hay que destacar el hecho de que casi el 50 por ciento de la superficie total fuera de tierras no aptas para el cultivo. Concretamente, el 19,6 por ciento era monte (alto y bajo), otro 19,6 por ciento era monte bajo y terrenos improductivos y un 6,3 por ciento terrenos totalmente improductivos. Las tierras laborables estaban ocupadas, en su práctica totalidad, por la trilogía mediterránea. Aunque los datos son de por sí significativos

he considerado conveniente aportar alguna evidencia cualitativa adicional procedente de los *Informes* de los ingenieros agrónomos directores de las colonias y de otras fuentes oficiales que permiten hacernos una idea más precisa de la realidad de la colonización de 1907. En lo que concierne a la calidad de las tierras la propia Junta de Colonización y Repoblación Interior manifestaba:

“...ha resultado que tales terrenos no eran los más favorables, ni por su situación ni condiciones agrológicas, para servir de base a la formación de pequeñas heredades agrícolas... ...se observará que todos los terrenos en los que se han establecido son, en su mayoría, excesivamente montuosos, predominando en ellos la roca dura, el pedregal, la pizarra. Y aquellos que son llanos, tienen suelo arenoso, muy poco fértil. Alguno está formado solo por tenues arenas voladoras.

Pero esta ínfima calidad de los terrenos colonizados y sus inadecuadas condiciones para el laboreo agrícola, dan mayor realce a los resultados del ensayo...”

“Los pobladores de “La Algaida”, conteniendo y cultivando del modo más intensivo que se pueda imaginar tenues arenas de las playas del mar; los de Galeón, Cañamero y Mongó (sic), rompiendo la dura roca, abriendo hoyos con dinamita para plantar vides, olivos almendros y algarrobos, y los de las colonias todas, convirtiendo el suelo áspero e ingrato en tierra cultivable, han dado prueba de constituir el elemento más esencial y poderoso para el buen éxito de la obra colonizadora.”¹³

Descripciones similares las podemos encontrar en los *Informes* realizados por los ingenieros directores de las colonias. Así, Manuel María Rueda y Marín, director de la colonia de Galeón afirmaba:

“Cada lote que se visita ofrece distintos motivos de sorpresa y satisfacción para el que los recorre, aunque esté algo enterado de la ímproba labor que ha sido preciso realizar para ponerlos en cultivo. En muchos la roca dura ha desaparecido al abrir los hoyos que han de servir de sostén a las cepas ; en otros se ve que la pronunciada pendiente de la ladera no ha impedido que el colono , con su arte, utilice terrenos en cualquier otro caso inadecuados para el cultivo”¹⁴

Por su parte el ingeniero agrónomo Luis Beneyto describía de esta forma la colonia de Els Plans:

“Está situada en sierra tan accidentada, que ofrece desniveles hasta de 450 metros. El pedregal, lejos de estar formado por bancos compactos que impidan la acción de los instrumentos agrícolas, como a primera vista parece, hállase (sic) constituido por agrupaciones de piedras de gran volumen en unos sitios, y de piedras sueltas en otros, susceptibles de fraccionamiento las primeras, y todas, aunque laboriosamente, posibles de transportar, con lo que el terreno laborable ha quedado libre , construyéndose en las pendientes más pronunciadas murates

¹³ Junta Central de Colonización (1924), p. 7.

¹⁴ Junta Central de Colonización (1924), p.32.

de sostenimiento y contención para las avenidas y formándose de este modo “bancales”, a fin de aprovechar el mayor terreno posible.”¹⁵

Finalmente, aunque podría aportar más ejemplos, el ingeniero director de la colonia de Valverde, Fernando García Puelles, comentaba en su informe lo siguiente:

“El terreno en el que se ha instalado la Colonia pertenece, geológicamente considerado, al terciario, estando constituido el subsuelo por roca caliza al descubierto en la cumbre de las lomas y apenas cubierto a trozos, cerca de ellas, por delgada capa laborable; esta aumenta al descender por las laderas, adquiriendo, término medio, la profundidad de veinticinco a treinta centímetros.”

“Trátase, pues, de un terreno de poco fondo, bastante pobre y situado en una región de condiciones climatológicas desfavorables para el cultivo. Añádase a esto la carencia absoluta de agua para el riego y se comprenderá lo difícil de su explotación.”¹⁶

A la mala calidad de los suelos y a las dificultades para su explotación hay que añadir el escasísimo apoyo económico prestado a las colonias que recibieron unos anticipos, por parte de la Junta Central de Colonización, de poco más de 6 millones de pesetas en total. La consecuencia inevitable fue la de la insuficiencia técnica y la inviabilidad económica de los lotes entregados a los colonos. Ello explica, en definitiva, que la situación real de muchas colonias fuera de abandono o de ocupación muy precaria. De esta forma se expresaba el ingeniero agrónomo director de La Caulina, Paulino Arias y Juárez:

“Algunos colonos han llegado a explotar sus lotes con cultivos de secano, obteniendo buen éxito. Sin embargo, es forzoso reconocer que los lotes de Caulina, sobre todo por la pequeña superficie que comprenden, solo son adecuados para el fin a que se destinaron, para el regadío. Esta es la razón principal de que al no llegar aún el agua del pantano del Guadalquivir a la Colonia, se hayan paralizado en ella los trabajos de instalación.”¹⁷

Finalmente es preciso destacar que no llegó a concederse ni un solo título de propiedad a los colonos instalados en estas tierras.¹⁸

El resultado final fue, por lo tanto, desolador y la propia Junta de Colonización lo reconoció así:

¹⁵ Junta Central de Colonización (1924), p. 48.

¹⁶ Junta Central de Colonización (1924), p. 53.

¹⁷ Junta Central de Colonización (1924), p. 25. El ingeniero Arias terminaba con algo parecido al popular cuento de *La Lechera*: “Para entonces (para cuando llegase el agua) las tierras, perfectamente limpias de grama y mullidas por un incesante movimiento de la azada, manejada por las propias manos de su poseedor, estarán en inmejorables condiciones para ser fecundadas por las aguas del pantano. Este consorcio originará una potente vegetación forrajera que las vacas estabuladas traducirán en carne, en leche, en estiércol con el que enriquecer nuevamente la tierra. El colono y su familia se nutrirán mejor; los niños serán más sanos, más robustos que sus progenitores; recibirán una enseñanza esmerada que les hará conscientes ciudadanos...”

¹⁸ En el acta del Consejo Nacional de Colonización número 5 de 4 de mayo de 1942 se dice textualmente: “se instalaron cooperativas pero no se llegó a dar título alguno de propiedad de las parcelas.”

*“Sin embargo, solo puede exponer una obra modestísima, porque se ha visto obligada a contener su actuación dentro de los estrechos límites que marca la parte preceptiva de la ley, que constituye un verdadero dique para el amplio desarrollo de los amplios ideales expuestos en la razonada Memoria que la sirve de antecedente.”*¹⁹

En realidad, lo insignificante de los resultados no debería sorprendernos dado el profundo conservadurismo que inspiró la Ley de 1907, -conservadurismo característico de los gobiernos de la época- que se manifestó en la paralización de algunos proyectos de reforma agraria algo más avanzados.²⁰

Los cuadros 3 y 4 sintetizan la información referida a las fincas parceladas con arreglo a la Ley de 1927. La información recogida es similar a la de los cuadros 1 y 2, aunque con pequeñas modificaciones derivadas de diferencias en la fuente de información. Así, además de los datos relativos a la superficie, distribución de la misma por cultivos y aprovechamientos y número de colonos, aparece información sobre el precio de adquisición, ya que a diferencia de las fincas colonizadas por ley de 1907 que procedían de donaciones municipales, las fincas parceladas por la Ley de 1927 eran de propiedad particular y se obtuvieron mediante compras. Sin embargo, la fuente no aporta datos sobre la superficie de los lotes, si bien se puede calcular su superficie media que alcanzaría la cifra de 6,25 ha. por parcela, si tenemos en cuenta el total de la superficie. Si computamos tan solo las tierras agrícola-mente aprovechables la extensión quedaría reducida a 3,6 ha. por lote.

El cuadro número 3 aparece dividido cronológicamente en tres partes. En la primera aparecen las fincas parceladas en el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera, en la segunda las correspondientes al periodo final de la monarquía y en la tercera las relativas a la fase final de aplicación de la norma que coincide con los primeros meses de la Segunda República. El cuadro se completa con los datos totales.

En lo que respecta a la primera etapa, la de la Dictadura, se parcelaron 23 fincas por las que el Estado pagó 11,6 millones de pesetas, con una superficie total de 19.865,3 ha. y en las que se situaron 3.622 colonos. En realidad, siendo estrictos, no se produjo un proceso de instalación de nuevos colonos. Lo que se hizo fue *convertir* en colonos a los arrendatarios de las fincas que se adquirían. Durante el año 1930 la parcelación afectó a 9 fincas que ocupaban una extensión total de 13.198 ha. en las que se asentaron 1.126 colonos y por las que el Estado abonó 5,4 millones de pesetas. Finalmente, en los primeros meses de la República, hasta septiembre de 1931, se compraron, por un importe total de 6,4 millones, 5 fincas con una superficie total de 7.410 ha. en las que se instalaron 1.726 colonos.

¹⁹ Junta Central de Colonización (1924), p. 6.

²⁰ J. Monclús y J. L. Oyón (1986), pp. 355-359 y Junta Central de Colonización (1924), p. 7.

FINCA	TÉRMINO MUNICIPAL	PROVINCIA	FECHA DE ADQUISICIÓN	PRECIO (miles de pes)	SUPERFICIE TOTAL (HA)	REGADÍO	CEREA DE SECAÑO	OLIVAR	VÍNEO	PASTOS	MONTES	IMPRO- DUCTIVOS	OTROS	NÚMERO DE COLONOS
MARIANA	JEREZ DE LOS CABALLEROS	BADAJÓZ	20/06/27	109	114	0	0	0	0	110(1)	0	4	0	15
MONTELOBO	JEREZ DE LOS CABALLEROS	BADAJÓZ	08/10/27	174,7	159	0	0	0	0	154(1)	0	5	0	24
NAVA	JEREZ DE LOS CABALLEROS	BADAJÓZ	02/08/27	300	300	0	0	0	0	293(1)	0	7	0	40
BENJAJAN	MURCIA	MURCIA	01/07/27	14,2	0,79	0,79	0	0	0	0	0	0	0	1
COTO REDONDO DE OTONES	OTONES DE BENJUMEA	SEGOVIA	11/02/27	707	1.640	0	1.358	0	0	86	151(2)	45	0	54
COTO REDONDO DE URRACA-MIGUEL	URRACA-MIGUEL	ÁVILA	19/07/28	583	2.370	0	0	0	0	2.362(3)	0	8	0	114
COTO REDONDO DE MEDINA	MEDIANO DE VOLTIOYA	ÁVILA	22/08/28	450	1.541	0	1.535	0	0	0	0	6	0	54
HAZA DE ARNAIZ	HAZA VIEJA	BURGOS	25/06/28	200	785	0	781	0	0	0	0	4	0	39
COLLAIDO	CÁCERES	CÁCERES	21/12/28	410,6	541	0	537	0	0	0	0	4	0	157
ALDEA DE SAN NICOLÁS	MOYA (SAN NICOLÁS)	CANARIAS	23/05/28	661,9	985	174	565	0	0	0	0	0	246(4)	391
DEHESA	JADRAQUE	GUADALAJARA	28/05/28	190	36	35	0	0	0	0	0	1	0	55
CUARTOS DEL MARQUÉS	BALLOBAR	HUESCA	22/06/28	366	4.550	0	1.820	0	0	2.319	0	20	391	491
MONTAÑA	BOLLULOS DEL CONDADO	HUELVA	13/08/28	1.350	954	0	100	696	0	150(5)	8	0	1.172	491
VILLAMARIA Y ENTRECAMINOS	VILLARGORDO	JAEÑ	17/03/28	2.744	883	9	488	358	0	22	6(9)	382	0	58
FUENTE MARIN Y HERNANDO	FUENTIUJERA DE TAJO	MADRID	17/07/28	500	701	0	683	0	0	12	0	6	0	18
ANTOJO Y VALGRANDE	OLMEDA DE CEBOLLA	MADRID	06/09/28	95	149	0	145	0	0	0	0	4	0	1
SAN BENITO	MURCIA	MURCIA	28/04/28	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
PIÑÓN DEL CONEJO	MURCIA	MURCIA	21/03/28	16	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1
COTO REDONDO DE BÓVEDA	BÓVEDA DEL RIO ALMAR	SALAMANCA	30/10/28	655	1.221	0	1.207	0	0	0	0	14	0	190
COTO REDONDO DE PINILLOS	PINILLOS DE POLENOS	SEGOVIA	14/06/28	0	597	0	588	0	0	0	0	9	0	34
COTO REDONDO DE GUARRATE	GUARRATE	ZAMORA	08/02/28	850	1.230	0	1.227	0	0	0	0	0	3	174
COTO DE VILLAVIEJA Y MONTE DE VILLAMANRIQUE	VILLAVIEJA DE SANDOVAL	LEON	26/08/29	470	416	416	0	0	0	0	0	0	0	70
SUB-TOTAL	NÚMERO DE FINCAS: 23			11.608,10	19.865,30	637,3	11.256	458	696	5.693	301	181	643	3.622
COTO REDONDO DE SOLOSANCHO	SOLOSANCHO	ÁVILA	18/07/30	1.225	5.400	114	1.800	0	0	0	3.470	16	0	397
COTO REDONDO DE OJOS ALBOS	OJOS ALBOS	ÁVILA	10/12/30	497	2.193	0	1.003	0	0	1.180	10	0	29	121
GRONDA DE GUADALUPE	CAMPOLUGAR	CÁCERES	30/08/30	580	435	0	435	0	0	0	0	4	0	61
PIÑAFELOR	MARTOS	JAEÑ	23/10/30	286	116	0	95	17	0	0	16	4	0	66
PLA DE ESCARPE	MÁSCALOREIG	LERIDA	03/02/30	412	413	393(7)	0	0	0	0	0	3	0	66
AVINGANTA	SEROS	LERIDA	05/12/30	125	45	28	0	14	0	0	0	3	0	29
VALDEGUERRA, VALDECASILLAS Y OTROS	COLMENAR DE OREJA	MADRID	25/02/30	55	50	0	13	34	0	0	0	3	0	29
COTO REDONDO DE "EL PEGO"	EL PEGO	ZAMORA	16/09/30	1.389	3.000	0	2.090	600	0	300	10	0	170	121
PATRIMONIO SOLFERINO	ALBATE DE CINCA	HUESCA	30/01/31	900	1.546	227	660	0	0	647	0	12	187	126
SUB-TOTAL	NÚMERO DE FINCAS: 9			5.469	13.198	762	6.096	665	0	647	4.966	62	0	1.126
BERCIAL	MONTERUBIO DE LA SERENA	BADAJÓZ	19/09/31	4.300	5.670	0	1.227	0	0	4.427(6)	0	16	0	1.409
PALMAR	VUJER DE LA FRONTERA	CÁDIZ	08/08/31	239	370	0	0	0	0	0	0	0	0	99
PRADO	PELEGRINA	GUADALAJARA	04/09/31	370	879	62	57	0	0	460	298	2	0	47
TEMEROSO DEL OTERO	PINARNEGRILO	SEGOVIA	25/06/31	160	206	0	198	0	0	0	0	8	0	85
COTO Y HUERTA DE CASETAS	CASETAS	ZARAGOZA	11/07/31	1.312	285	207	11	0	0	0	0	4	63(8)	86
SUB-TOTAL	NÚMERO DE FINCAS: 5			6.381	7.410	269	1.863	0	0	4.887	298	30	63	1.726
TOTAL:	NÚMERO DE FINCAS: 37			23.458,10	40.473,30	1.668,30	19.215	1.123	696,00	11.227	5.565	273	706	6.474

Cuadro 3. Fincas afectadas por la Ley de Parcelaciones de 1927. Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de fincas propiedad del Instituto Nacional de Colonización, facilitadas por el IRYDA.

NOTAS: (1) Pastos y labor con encinas. (2) Monte bajo y encinar. (3) Pasto y labor sin arbolado. (4) Nopal y orrifes. (5) Encinar. (6) Pasto y labor con arbolado. (7) En parte soto. (8) Prados. (9) Soto.

AÑOS	1927 a 1929		1930		1931		TOTAL	
NÚMERO DE FINCAS ADQUIRIDAS	23		9		5		37	
PRECIO (MILES PTA)	11.608,10		5.469		6.381		23.458,10	
	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
SUPERFICIE TOTAL	19.865,30	100	13.198	100	7.410	100	40.473,30	100
REGADÍO	637,3	3,2	762	5,8	269	3,6	1.668,30	4,1
CEREAL DE SECANO	11.256	56,7	6.096	46,2	1.863	25,1	19.215	47,5
OLIVAR	458	2,3	665	5	0	0	1.123	2,8
VIÑEDO	696	3,5	0	0	0	0	696	1,7
PASTOS	5.693	28,6	647	4,9	65,9	65,9	11.227	27,7
MONTES	301	1,5	4.966	37,6	4	4	5.565	13,7
IMPRODUCTIVO	181	0,9	62	0,5	0,4	0,4	273	0,7
OTROS	647	3,2	0	0	0,8	0,8	706	1,7
NÚMERO DE COLONOS	3.622		1.126		1.726		6.474	
SUPERFICIE MEDIA POR COLONO (HA)	5,48		11,7		4,29		6,25	

Cuadro 4. Resultados de la aplicación de la Ley de Parcelaciones de 1927.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro 3.

NÚMERO DE FINCAS ADQUIRIDAS	55	
	HA	%
SUPERFICIE TOTAL	51.252,00	100
REGADÍO	2.053,00	4
CEREAL DE SECANO	22.300	43,5
OLIVAR	1.298	2,5
VIÑEDO	2.821	5,5
PASTOS	11.273	22
MONTES	7.679	15
MONTE-IMPRODUCTIVO	2.118	4,1
IMPRODUCTIVO	953	1,8
OTRAS	757	1,5
NÚMERO DE COLONOS	8.180	
SUPERFICIE MEDIA POR COLONO (HA)	6,2	

Cuadro 5. Resultados de la aplicación de las Leyes Colonizadoras de 1907 y 1927, entre 1907 y 1931.

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 2 y 4.

En total, la aplicación de Ley de Parcelaciones entre 1927 y 1931 supuso la compra de 37 fincas, por las que se pagaron 23,5 millones de pesetas, con una superficie total de 40.473,3 ha. y en las que se asentaron 6.474 colonos. El Estado se limitó a anticipar en concepto de préstamo a los arrendatarios-colonos las cantidades reseñadas para hacer frente a la compra de las fincas a sus propietarios. No se invirtió, según información posterior del propio INC, ni una sola peseta en mejorar las explotaciones o en dotarlas de mejores medios de producción y no se puso en riego ni una sola hectárea.²¹

²¹ Según el Director General del INC: "Con arreglo a esta Ley el Estado facilitaba hasta el 80 por ciento del precio de la compra de fincas ofrecidas por particulares, siempre que esta compra estuviese concertada entre el propietario y un determinado número de colonos. El cambio de dominio se hacía sin transformaciones técnicas de ningún género, y, con auxilios de poca monta, se pretendía

La compra se hizo mediante pago al contado y, lo que es mucho más significativo, se adquirieron fincas, no por iniciativa del Estado, sino aceptando las ofertas de propietarios que, por la razón que fuera, querían desprenderse de ellas.²² Además, según denunciaba Cristóbal de Castro, el precio de adquisición resultó muy ventajoso para los propietarios.²³

Aunque las cifras y las condiciones comentadas hablan por sí mismas, –¿qué suponía asentar a 6.474 colonos, en un periodo de cinco años de aplicación de la Ley de 1927, en relación a la magnitud del problema que se pretendía solucionar?– no está de más extraer algunas otras conclusiones que permiten hacer una valoración más precisa del alcance real de la aplicación de esta Ley.

Hay que comenzar diciendo que las características de las fincas compradas, en cuanto a calidad del suelo y posibilidades de aprovechamiento son muy diferentes de las de las fincas colonizadas con arreglo a la Ley de 1907. Recuértese que estas últimas procedían de donaciones de los ayuntamientos, mientras que las primeras eran fincas adquiridas a propietarios particulares. El contraste más significativo es que la superficie improductiva, dominante en las fincas de 1907, es en las de 1927 muy reducida, alcanzando tan solo un 0,7 por ciento del total. La superficie de montes, en buena medida arbolados, aunque no conocemos el dato con precisión, alcanzaba un 13,7 por ciento y la de pastos un 27,7 por ciento. Las superficies agrícolas, en un sentido estricto, ocupaban un 56,1 por ciento. Otros rasgos destacables serían los siguientes:

- a) En primer lugar que tan solo fueron parceladas un total de 1.668, 3 ha. de regadío, un 4,1 por ciento del total. Durante la Dictadura se adquirieron 637,3 ha. de regadío, mientras que en 1930 y en los meses de 1931 se compraron 762 y 269 ha. respectivamente. Cifras, todas ellas, irrisorias.
- b) En segundo lugar que, de nuevo, los principales cultivos y aprovechamientos se reducían, inevitablemente, a la ya citada trilogía mediterránea.

Estos dos hechos, unidos a la escasa dimensión media de los lotes otorgados a los arrendatarios-colonos, revelan que no solo la reforma era insignificante en su dimensión cuantitativa, sino que, además, no tenía ninguna perspectiva de futuro. Recordemos que la trilogía mediterránea había sufrido, muy duramente, el impacto de la crisis finisecular y que las perspectivas futuras de estos aprovechamientos solo estaba asegurada si se

que estos parceleros consiguiesen la propiedad de la tierra.” Acta número 5 del Consejo Nacional de Colonización de la sesión del 4 de marzo de 1942, p. 4.

22 C. de Castro (1931), p. 186.

23 C. de Castro (1931), p. 186.

producían, -al margen de la política de protección- cambios sustanciales en los mismos: abandono de tierras marginales o poco aptas para estos cultivos, modernización y mejora de las prácticas culturales y ampliación de las superficies medias por explotación. En estas circunstancias, ¿qué futuro tenía un parcelero al que se relegaba a ocupar un minifundio en una finca cuyo propietario había considerado que su mejor fin era ser vendida al Estado? Añadamos que los “afortunados” colonos cargaban con el precio de la parcela, cuyo importe tenían que devolver al Estado. No es extraño que en 1931, año en el que concluye la aplicación de la Ley de Parcelaciones, no se hubiese otorgado ni un solo título de propiedad.²⁴ En definitiva, la incidencia de la Ley sobre la estructura de la propiedad fue nula.

Es preciso referirse, también, a otra conclusión que se desprende de los cuadros 1 y 3. Teóricamente las leyes de 1907 y 1927 debían contribuir a la solución del problema social-agrario, entendido como injusta distribución de la propiedad y la presencia en el campo español de cientos de miles de campesinos sin tierras viviendo, muchas veces, en condiciones de verdadera miseria. Este problema se presentaba con caracteres particularmente agudos en las zonas de latifundio. Lo que muestran los cuadros es que la actuación gubernamental afectó solo en parte a estas zonas de latifundismo. No deja de sorprender que la Dictadura no actuase mediante la Ley de Parcelaciones en las provincias emblemáticas del latifundismo como Sevilla, Córdoba o Cádiz.

Los resultados, a mi entender, no dejan lugar a dudas y comparto plenamente el juicio de I. J. Blanco en el sentido de que el problema de la distribución de la propiedad era más agudo en 1931 que a comienzos del siglo.²⁵

Queda, finalmente, otro aspecto por tratar. Como ya he indicado, algunos autores han sostenido un último argumento favorable a la obra de la Dictadura y, en general, a la de los gobiernos conservadores entre 1907 y 1931. Este último argumento puede exponerse de la siguiente manera: es verdad que no se hizo casi nada, pero se avanzó en el diseño de planes, elaboración de normas, creación de instituciones, etc. que con posterioridad servirían de base para nuevas actuaciones. Tendría el valor de la experiencia. Antes de entrar en este asunto, señalaré que este mismo argumento: el valor de la experiencia sería utilizado por los responsables del INC durante los años cuarenta para justificar su absoluta falta de actividad.

24 Hasta 1941 no se otorgó ningún título de propiedad a los parceleros. Ello permitió al Director General del INC hacer una afirmación que revela un injustificado triunfalismo y una amnesia sobre lo ocurrido en el país en los años inmediatamente anteriores: “al finalizar el año pasado (se refiere a 1941), tuve la satisfacción de otorgar personalmente los títulos de propiedad a los parceleros de Jadraque (Guadalajara). Desde Carlos III era la primera vez que unos agricultores obtenían de manos del Estado la propiedad de las tierras que venían cultivando.” Acta número 5 del Consejo Nacional de Colonización de la sesión de 4 de marzo de 1942, p. 5.

25 J. I. Jiménez Blanco (1986), p. 120.

En mi opinión, sostener que las sucesivas y fracasadas experiencias constituían un elemento valioso para una futura actuación es insostenible. En primer lugar porque ni siquiera esos presumibles avances teóricos, doctrinales o legislativos, suponían nada nuevo ni original en el análisis de los problemas y en la elaboración de soluciones a la cuestión agraria. Las reformas que tan tímidamente se emprendieron en España estuvieron inspiradas en un primer momento, Ley de 1907, en la doctrina social de la Iglesia y, posteriormente, los de la Dictadura de Primo de Rivera y los de colonización del franquismo lo estuvieron en la política de *bonifica y colonizzazione* del fascismo italiano.²⁶ Dicho de otra forma, no puede hablarse de una tradición teórica y doctrinal propia, autóctona, que culminase finalmente en la ejecución de los proyectos. Este hecho es, a mi parecer, incontestable. Cuando a finales de los años cuarenta el INC consiguió, por fin, con la Ley de colonización y distribución de la propiedad en las zonas regables de 1949, poner en marcha de manera efectiva la colonización, los referentes no fueron la experiencia anterior, ni la doctrina social de la Iglesia, ni el fascismo. La referencia fue la colonización norteamericana.²⁷

El segundo elemento que me lleva a cuestionar la validez del argumento de la “valiosa experiencia” lo considero aún más importante. En opinión de la mayoría de los expertos cualquier proceso de reforma social o económica que pretenda llevarse a cabo por parte del Estado (en cualquier materia) y que implique un profundo cambio de las estructuras vigentes debe caracterizarse, entre otras cosas, por la rapidez en su ejecución y, aunque parezca obvio, por su eficacia. La rapidez es una condición imprescindible para impedir la resistencia organizada de los grupos privilegiados que se verán afectados por la reforma.²⁸ La eficacia afecta a la actitud que adoptarán los grupos que tienen que colaborar, más o menos voluntariamente, en el proceso. Una manifiesta ineficacia por parte de los poderes públicos en sus cometidos erosionará gravemente la confianza de estos grupos. Debemos recordar que la decisión de los agentes económicos de asumir un determinado riesgo dependerá de las expectativas de beneficios que se deriven del mismo. Si se trata de participar, por ejemplo, en proyectos de transformación en regadío, -más costosos y complicados para los propietarios de lo que la gente suele pensar- la actitud de los propietarios implicados será positiva, recelosa o francamente contraria en función de las expectativas de futuros beneficios. Y estas expectativas vendrán determinadas en gran medida por el conocimiento que los agentes económicos privados implicados

26 Puede verse, al respecto, A. Martín-Artajo y M. Cuervo (1933), S. Aznar (1930), J. Monclús y J. L. Oyón (1986) y (1988), N. Ortega (1979a) y (1979b), Robledo (1993) y C. Barciela (1989) y (2004).

27 Puede verse C. Barciela (1989) y (2004)

28 Un buen ejemplo de lentitud y vacilaciones que tuvo como consecuencia la formación de poderosos grupos capaces de frenar el proceso de reforma lo tenemos en la labor obstruccionista a la reforma de la Segunda República. Al respecto puede verse la obra de Malefakis (1971).

tengan acerca de la solvencia técnica y económica del Estado, su socio en la aventura inversora. Si la intervención del Estado en periodos anteriores (“la experiencia acumulada”) se ha caracterizado por la profusión de normas, planes, iniciativas, encuestas, elaboración de multitud de proyectos puestos en marcha tarde y parcialmente, en definitiva, sin resultados tangibles y favorables, será de esperar que los propietarios de tierras se resistan a participar en nuevos planes y se retraigan a la hora de realizar inversiones con altos niveles de riesgo. No debemos olvidar que los funcionarios de los organismos públicos no tienen vinculadas sus retribuciones al éxito de los proyectos. Todo lo contrario de los propietarios que arriesgan sus capitales. En definitiva, una larga experiencia no traducida en realidades no puede considerarse como positiva. Lo más probable es que tenga efectos perniciosos y duraderos. En este sentido la información disponible sobre las causas más frecuentes de los fracasos en los grandes proyectos de innovación tecnológica en la agricultura, incluida la transformación en regadío, coincide en señalar como una de las más importantes, la de los problemas **administrativos**, tanto los del propio proyecto, como los de la administración general del país.²⁹

No obstante, no parece razonable llevar demasiado lejos el argumento de la ineficacia del Estado frente a la cual la actitud inmovilista de los propietarios resultaría justificada. En buena medida hay que tener presente que el inmovilismo puede responder a una defensa por parte de los propietarios de formas de producción tradicionales que resultan muy ventajosas y no exigen nuevas inversiones. Así, por ejemplo, el riego (a cambio incluso de la cesión de parte de sus propiedades al Estado con fines de colonización) puede traducirse en un significativo aumento de la rentabilidad de las explotaciones. Sin embargo, es evidente que los propietarios pueden preferir una alternativa tradicional consistente en menores ingresos minimizando las inversiones y el riesgo y maximizando el uso de las tecnologías tradicionales. Pueden preferir maximizar sus beneficios en el marco de una tecnología conocida antes de intentar maximizar los beneficios absolutos incurriendo en inversiones y riesgos. De manera que pueden darse casos de actitudes inmovilistas que no estén provocadas por malas experiencias con el Estado. En cualquier caso cuando el Estado toma la iniciativa de llevar a cabo planes de reforma y transformación de la agricultura debe asumir que tiene la responsabilidad de elaborar planes técnica y económicamente viables y, lo que es si cabe aún más importante, convencer de su bondad a los particulares que tienen que emprender inversiones y asumir riesgos.

En lo que concierne al periodo 1907-1931 se puede afirmar que, en realidad, el Estado no pretendió, verdaderamente, modificar las cosas ni llevar

29 Así lo indicaba ya Mario Bandini en 1964. Con posterioridad analistas como J. Price (1982) y los sucesivos *informes anuales* del Banco Mundial han insistido en este problema.

a cabo ningún proyecto serio de colonización basado en la puesta en riego y en la distribución de la propiedad. Considero que, efectivamente, como afirman Nadal y Fontana, la Dictadura fue “un régimen de terratenientes, gente de orden y señoritos que practicó una política de conservadurismo puro, aderezada con rasgos de paternalismo ilustrado.” Afirmación que puede aplicarse a los gobiernos de las primeras décadas del siglo.

El conservadurismo significaba, ante todo, el mantenimiento de las estructuras de la propiedad agraria, incluyendo la existencia de una abundante y barata mano de obra y altos niveles de paro agrícola, lo que chocaba frontalmente con cualquier proyecto serio y en gran escala de asentamientos de campesinos. Los rasgos de “paternalismo ilustrado” los encontramos en la multitud de proyectos de reforma nunca llevados a cabo.

FUENTES

Actas del Consejo Nacional de Colonización, Archivo del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Relación de fincas propiedad del Instituto Nacional de Colonización, Archivo del IRYDA.

BIBLIOGRAFÍA

AZNAR, S. (1930): *Despoblación y colonización*, Barcelona, Labor.

WORLD BANK: *Annual Review of Project Performance Audit Results*, Washington D. C., World Bank.

BANDINI, M. (1964): *Economía agraria*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 2 vols.

BARCIELA, C. (1989): “Aproximación a los elementos básicos para una historia financiera del Instituto Nacional de Colonización”, en *Historia y evolución de la colonización agraria en España*. Vol. II, Madrid, Ministerio de Agricultura, Ministerio para las Administraciones Públicas y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

BARCIELA, C. (2004): “La propiedad de la tierra durante el franquismo: raíces doctrinales y propuestas de reforma”, en *Economía y cambio histórico. Estudios en homenaje a Luis Ángel Rojo*, Madrid, Editorial Complutense, vol. II.

BARCIELA, C., LÓPEZ ORTIZ, M. I. y MELGAREJO, J. (1996): “La intervención del Estado en la agricultura durante el siglo XX”, en P. Tedde de Lorca (ed.), *El Estado y la modernización económica*, Ayer, 21.

CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (coords.) (2005): *Estadísticas Históricas de España, siglos XIX y XX*, Bilbao, Fundación BBVA, 3 vols.

- CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (2010): *Historia Económica de la España Contemporánea (1789-2009)*, Barcelona, Crítica.
- CASTRO, C. de (1931): *Al servicio de los campesinos. Hombres sin tierra tierra sin hombres. La nueva política agraria. (Ensayo sobre la reforma agraria en Europa y su aplicación en España)*, Madrid, Javier Morata, Editor.
- COMÍN, F. (1988): *Hacienda y economía en la España contemporánea*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2 vols.
- COMÍN, F. (1996): *Historia de la Hacienda Pública, II. España (1808-1995)*, Barcelona, Crítica.
- COMÍN, F. (2002): “El periodo de entreguerras (1914-1936)”, en F. Comín, M. Hernández y E. Llopis (eds.), *Historia económica de España. Siglos X-XX*, Barcelona, Crítica.
- COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (1984): “La política monetaria y fiscal durante la Dictadura y la Segunda República”, *Papeles de Economía Española*, 20.
- FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2007): *El apagón tecnológico del franquismo. Estado e innovación en la agricultura española del siglo XX*, Valencia, Ministerio de Cultura, Tirant lo Blanch.
- FONTANA, J. y NADAL, J. (1980): “España 1914-1970”, en C. M. Cipolla (ed.), *Historia Económica de Europa*, tomo 6, parte primera, *Economías Contemporáneas*, Barcelona, Ariel.
- FRAILE, P. (1991): *Industrialización y grupos de presión. La economía política de la protección en España 1900-1950*, Madrid, Alianza.
- FRAILE, P. (1998): *La retórica contra la competencia en España (1875-1975)*, Madrid, Fundación Argentaria- Visor.
- GALLEGO, D. (1986): *La producción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX y 1935*, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 2 vols.
- GARCÍA DELGADO, J. L. (1985): “Nacionalismo económico e intervención estatal, 1900-1930”, en N. Sánchez Albornoz (comp.), *La modernización económica de España, 1830-1930*, Madrid, Alianza.
- GARRABOU, R., BARCIELA, C. y JIMÉNEZ BLANCO, J. I. (eds.) (1986): *Historia agraria de la España contemporánea. 3. La crisis de la agricultura tradicional (1900-1960)*, Barcelona, Crítica.
- GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1978-1979): “Contribución al análisis histórico de la ganadería española, 1865-1929”, *Agricultura y Sociedad*, núms. 8 y 10.

- GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1983a): "Notas sobre la producción agraria española, 1891-1931", *Revista de Historia Económica*, 2.
- GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL (1983b): "Evolución de la superficie cultivada de cereales y leguminosas en España, 1886-1935", *Agricultura y Sociedad*, núm. 29.
- JUNTA CENTRAL DE COLONIZACIÓN Y REPOBLACIÓN INTERIOR (1924): *Sucinta información de las colonias agrícolas instaladas y en periodo de establecimiento o estudio que publica la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior con motivo de la Exposición Universal e Internacional de Cooperación y Obras Sociales de Gante, 1924*, Madrid, Gráficas Reunidas.
- MALEFAKIS, E. (1971): *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Barcelona, Ariel.
- MARTÍN-ARTAJÓ, A. y CUERVO, M. (1933): *Doctrina social católica de León XIII y Pío XI*. (Prólogo de Á. Herrera), Barcelona, Labor.
- MARTÍN ACEÑA, P. (1984): *La política monetaria en España, 1919-1935*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.
- MELGAREJO, J. (1988): *La Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Modernización económica o consolidación de las clases dominantes del regadío?*, Murcia, COIA.
- MELGAREJO, J. (1995): *La intervención del Estado en la Cuenca del Segura, 1926-1986*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
- MELGAREJO, J. (2000a): "De la política hidráulica a la planificación hidrológica. Un siglo de intervención del Estado.", en C. Barciela y J. Melgarejo (eds.), *El agua en la Historia de España*, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- MELGAREJO, J. (2000b): "Las Confederaciones Hidrográficas", *Alquibla*, 6.
- MONCLÚS, J. y OYÓN, J. L. (1988): *Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España. Vol. I. Políticas y técnicas en la ordenación del espacio rural*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Ministerio para las Administraciones Públicas y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- MONCLÚS, J. y OYÓN, J. L. (1986): "De la colonización interior a la colonización integral (1900-1936). Génesis y destino de una reforma agraria técnica", en R. Garrabou, C. Barciela y J. I. Jiménez Blanco (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 3. La crisis de la agricultura tradicional (1900-1960)*, Barcelona, Crítica.
- NADAL, J., CARRERAS, A. y SUDRIÀ, C. (compiladores) (1987): *La economía española del siglo XX. Una perspectiva histórica*, Barcelona, Ariel.

- ORTEGA CANTERO, N. (1979a): *Política agraria y dominación del espacio*, Madrid, Ayuso.
- ORTEGA CANTERO, N. (1979b): “Política hidráulica y política colonizadora durante la Dictadura de Primo de Rivera”, *Cuadernos Económicos de ICE*, 10.
- PAN-MONTOJO, J. (2005): *Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España*, Madrid, Ministerio de Agricultura-Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos.
- PAN-MONTOJO, J. (2011): “El Ministerio de Agricultura entre 1900 y 1931”, en R. Robledo (coord.), *Historia del Ministerio de Agricultura 1900-2008. Política agraria y pesquera de España*, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
- PAREJO, A. y SÁNCHEZ PICÓN, A. (2007): *La modernización de España (1914-1939)*, Madrid, Síntesis.
- PRADOS DE LA ESCOSURA, L. (2003): *El progreso económico de España (1850-2000)*, Bilbao, Fundación BBVA.
- PRICE GITTINGER, J. (1982): *Economic Analysis of Agricultural Projects*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- ROBLEDO, R. (1993): *Economistas y reformadores españoles: La cuestión agraria (1760-1935)*, Madrid, Ministerio de Agricultura.
- SIMPSON, J. (1992): “Los límites del crecimiento agrario: España 1860-1936”, en *El desarrollo económico de la Europa del Sur. España e Italia en perspectiva histórica*, Madrid, Alianza.
- TORTELLA, G. (1994): *El desarrollo de la España contemporánea*, Madrid, Alianza.
- VELARDE, J. (1973): *Política Económica de la Dictadura*, Madrid, Guadiana, 2ª edición.
- VELASCO, C. (ed.) (1979): *Economía y política de la Dictadura de Primo de Rivera*, *Cuadernos Económicos de ICE* (monográfico).
- ZAMBRANA, F. (1987): *Crisis y modernización del olivar español, 1870-1930*, Madrid, Ministerio de Agricultura.